



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05088-31-05-002-2022-00106-01
Demandante:	María Patricia Soto Vélez
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Apelación y Consulta sentencia
Procedencia:	Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Reliquidación pensión, sumatoria de tiempos públicos

Medellín, octubre siete (7) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 a decidir el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de las partes, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, el 11 de agosto de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora MARÍA PATRICIA SOTO VÉLEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, Radicado 05088-31-05-002-2022-00106-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora MARIA PATRICIA SOTO VÉLEZ, convocó a juicio ordinario laboral a COLPENSIONES, pretendiendo se declare que, por ser beneficiaria del régimen de transición, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 90%, conforme al Decreto 758 de 1990 y atendiendo a la sumatoria de tiempos públicos y privados, en consecuencia,, se condene a Colpensiones a la reliquidación, reconocimiento y pago del mayor valor de la pensión, así como al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que la señora María Patricia Soto Vélez, nació el 09 de septiembre de 1957, que acredita 1295 semanas entre tiempo público y privado, que el 27 de julio de 2015 solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, prestación que le fue reconocida mediante resolución GNR 31987 del 16 de octubre de 2015, en cumplimiento de la Ley 71 de 1988, en cuantía mensual de \$3.113.756, atendiendo a un IBL de \$4.151.675 y una tasa de reemplazo del 75%, decisión frente a la cual se presentaron los recursos de ley a fin de que se reliquidara la pensión de vejez, de conformidad con el Decreto 758 de 1990, aplicando tasa de reemplazo del 90%, petición que fue negada mediante resoluciones GNR 415485 de 2015 y VPB 11413 de 2016.

Se relató que el 11 de diciembre de 2020, la accionante solicitó nuevamente la reliquidación de la pensión de vejez y Colpensiones mediante Resolución SUB 93810 del 20 de abril de 2021 negó lo solicitado, pues para contabilizar las semanas en aplicación del Decreto 758 de 1990, solo tiene presente 963 semanas efectivamente cotizadas al sistema, lo que daría lugar a una tasa del 72%, decisión respecto de la cual, igualmente, se presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron despachados

desfavorablemente a través de las resoluciones SUB 141967 del 17 de junio de 2021 y DPE 8398 del 29 de septiembre de 2021.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, aceptando como ciertos los fundamentos fácticos de la misma. A su vez, en oposición el éxito de las pretensiones propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar reliquidación de la pensión de vejez; inexistencia de los intereses moratorios; improcedencia de la indexación; compensación; descuentos del retroactivo por salud; prescripción; buena fe; imposibilidad de condena en costas y la genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 11 de agosto de 2022, el Juzgado de conocimiento condenó a Colpensiones a reconocer y pagar a la demandante la suma de \$26.484.107 por concepto de reajuste pensional causado entre el 30 de marzo de 2019 y el 31 de julio de 2022, ordenando que, a partir del mes de agosto de 2022, la entidad continúe reconociendo y pagando una mesada pensional que no podrá ser inferior a \$5.051.117, sin perjuicio de los incrementos anuales, autorizando a Colpensiones a realizar los descuentos en salud a que haya lugar, igualmente, condenó a la accionada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el retroactivo liquidado hasta que se verifique el pago y desde el 30 de marzo de 2019; declaró parcialmente probada la excepción de prescripción y condenó en costas a Colpensiones.

1.4.- RECURSOS

Demandante

Solicita se revise la fecha de reconocimiento de la reliquidación de la prestación, teniendo en cuenta que se solicitó la misma el 11 de diciembre de 2020, por lo tanto, atendiendo a la prescripción, se debería reconocer el reajuste tres años hacia atrás.

Colpensiones

Sostuvo que a la demandante se le reconoció la pensión de vejez mediante la Resolución GNR 31976 del 16 de octubre de 2015 en cumplimiento de los requisitos de la Ley 71 de 1988, en cuantía de \$3.113.756, certificando 1278 semanas cotizadas, sumando tiempos públicos y privados, además, que mediante Resolución SUB 93810 de abril 2021, se resolvió la solicitud de reliquidación de pensión bajo el régimen establecido en el Decreto 758 de 1990 con tasa de reemplazo del 90%, señalando que para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que la peticionaria cumple con los requisitos del régimen de transición de la Ley 71 de 1988 que le es más favorable, razón por la cual no existe motivos de hecho o derecho que permitan generar retroactivo alguno o incremento de mesada pensional, por lo que se niega la solicitud, y por ello, solicita se revoque la sentencia proferida.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció el apoderado de Colpensiones, quien reiteró los argumentos planteados en la sustentación del recurso de alzada, a fin de obtener la revocatoria de la sentencia, en tanto la prestación de la actora, le fue liquidada con base en la normatividad que le era más favorable.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la señora María Patricia Soto Vélez, nació el 9 de septiembre de 1957, conforme a la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 48 del anexo 01 del expediente digital.
- Que por medio de la Resolución GNR 318917 del 16 de octubre del 2015, Colpensiones reconoció la pensión de vejez a la actora, a partir del 1º de abril del 2015, en cuantía de \$3.113.756, prestación concedida con fundamento en la Ley 71 de 1998, decisión que fue confirmada a través de la Resolución GNR 415485 del 22 de diciembre de 2015 y VPB 11413 del 8 de marzo de 2016- ver

folios 71 a 76, 78 a 82 y 84 a 92 respectivamente, del anexo 01 del expediente digital-.

- Que el 11 de diciembre de 2020, la accionante solicitó la reliquidación de la pensión de vejez y en atención a ello, Colpensiones profirió la Resolución SUB 93810 del 20 de abril de 2021, mediante la cual, reliquida la prestación, fijando como valor de la mesada pensional \$3.518.210 para el año 2017, aplicando la Ley 71 de 1998, confirmada por medio de la Resolución SUB 141964 del 17 de junio de 2021 y DPE 8398 del 29 de septiembre de 2021, según se desprende de los documentos visibles a folios 93, 97 a 105, 112 a 142 del anexo 01 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y consulta proferida por la señora Juez Segunda Laboral del Circuito de Bello, determinando para tal fin, si tiene derecho la demandante, a que se le reliquide la pensión de vejez, teniendo en cuenta la sumatoria de los tiempos públicos laborados sin cotización al ISS y los tiempos privados efectivamente cotizados, bajo los supuestos consagrados en el Decreto 758 de 1990, en caso afirmativo, si hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?

¿Si se encuentran afectados por el fenómeno prescriptivo los reajustes de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 30 de marzo de 2019?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, (i) es procedente reliquidar la pensión de vejez de la demandante, con una tasa de reemplazo del 90%, teniendo en cuenta en el total de semanas, incluida la sumatoria del tiempo público no cotizado, conforme al régimen de transición pensional y el Decreto 758 de 1990, (ii) procede el reconocimiento de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, (iii) opera la prescripción respecto de los reajustes de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 30 de marzo de 2019, en consecuencia, la providencia deber ser CONFIRMADA.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

De la reliquidación de la pensión de vejez, aplicando la sumatoria de tiempo público

La Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-769 de 2014, con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, compendia la línea jurisprudencial, construida de tiempo atrás, según la cual, es procedente la acumulación de cotizaciones y tiempo de servicios en el sector público, con el fin de reconocer una pensión de vejez, en aplicación del régimen de transición, Acuerdo 049 de 1990.

Debe recordarse que la unificación que realiza la Sala Plena, en la sentencia citada, no se da respecto de la viabilidad jurídica de la sumatoria, criterio uniforme y pacífico en el Tribunal Constitucional, sino respecto de la posibilidad de la misma, con relación al requisito de las 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima pensional.

En la referida sentencia, en lo pertinente, se expone:

“Justamente en aplicación de esta tesis, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido expresamente que (i) el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 en

ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al fondo del Instituto de Seguros Sociales’ por lo que se incurre en un error al interpretar esta norma de manera distinta a lo que realmente se encuentra establecido en ella y (ii) en virtud del principio hermenéutico de interpretación más favorable a los intereses del trabajador, es posible computar las semanas que cotizó una persona en el sector público antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993 con las que cotizó como empleado del sector privado en cualquier tiempo ”.

... “En jurisprudencia más reciente la Corte se pronunció sobre el caso de una señora de 77 años que laboró 405 semanas como servidor público y cotizó 596 semanas al Instituto de Seguros Sociales, para un total de 1001, a quien le fue negada la pensión de vejez por no ser posible, según esa entidad, acumular tiempos de servicio bajo el régimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990. Así, mediante la sentencia T-100 de 2012, consideró:

“[L]a jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática al resaltar que esta interpretación de la normativa es errónea y atenta contra los derechos fundamentales de los beneficiarios del régimen de transición.

Esto por cuanto: (i) al exigir que para acceder a la pensión de vejez de acuerdo con el Decreto 758 de 1990 las cotizaciones se hayan realizado de manera exclusiva al Seguro Social, se está requiriendo el cumplimiento de un elemento que la norma no consagra; (ii) los requisitos para acceder a los beneficios Sistema General de Seguridad Social se acreditan es ante el sistema mismo y no ante las entidades que lo conforman; y (iii) el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 limitó el régimen de transición a solo tres ítems (edad, tiempo y monto) y estableció que ‘[T]as demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley’, por lo que haciendo una lectura integral de la Ley 100 de 1993 -especialmente del literal f) del artículo 13, el parágrafo 1º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la misma-, los tiempos deben acumularse para efectos de la contabilización del número de semanas de cotización requeridas”.

En la misma dirección la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a su nueva integración, en providencias CSJ SL1947-2020 y CSJ SL1981-2020, proferidas el 01 de julio de 2020, cambió la postura negativa respecto a la posibilidad de sumatoria de tiempos públicos y privados, para propugnar la viabilidad de la sumatoria de tiempos públicos y privados, en aplicación del régimen de transición.

A su vez en sentencia SL 2557 (72425) del 08 de julio de 2020, magistrado ponente doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, la Sala Laboral de la citada

Corporación, extiende la procedencia de la referida acumulación de tiempos, para efectos de la reliquidación pensional en los siguientes términos:

“La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultractiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.

En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad(...).

Conforme lo anterior, conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.

De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante...”

Así las cosas, en acatamiento del precedente jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, debe acogerse la tesis de la pertinencia de la reliquidación de las pensiones de vejez, reconocidas bajo el amparo del régimen de transición, aplicando para ello, la sumatoria de tiempos públicos y privados.

2.6.- CASO CONCRETO

En el asunto bajo estudio, no hay discusión alguna en torno a que la señora MARIA PATRICIA SOTO VÉLEZ, es beneficiaria del régimen de transición pensional contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, contaba con 36 años de edad, en tanto que nació el 09 de septiembre de 1957 y así lo reconoció Colpensiones en la Resolución GNR 318917 de 2015, en tal sentido, su derecho pensional debe resolverse a la luz de las disposiciones del régimen anterior al cual se encontraba afiliada para la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, precisando, que tal y como lo refirió la a quo, en un mismo afiliado pueden convergir varios regímenes pensionales, para el caso concreto la Ley 71 de 1988, la Ley 33 de 1985 y el Decreto 758 de 1990.

Lo anterior, permite que la definición del derecho pensional de la actora, pueda ser estudiado de acuerdo con los requisitos señalados en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y en vista de que la demandante cuenta con 1295 semanas, tal y como lo reconoce Colpensiones en la Resolución SUB 93810 del 20 de abril de 2021, (963.43 semanas cotizadas en Colpensiones y 331.57 semanas públicas) laboradas en toda su vida laboral, sumando los tiempos públicos y privados, es claro, que la tasa de reemplazo a aplicar, debe de ser del 90%, conforme lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, tal y como lo estableció el a quo, de ahí que, no le asiste razón al apoderado de Colpensiones, al sostener que la normatividad más favorable a la pretensora, es el correspondiente a la Ley 71 de 1988, con el cual le corresponde una tasa de reemplazo del 75%.

En cuanto al IBL, se tiene que el mismo no fue discutido en el proceso, de ahí que se parte del liquidado por Colpensiones en la Resolución SUB 93810 del 20 de abril de 2021, que lo fue de \$4.690.946, al cual aplicada una tasa de reemplazo del 90%, arroja como valor de la mesada pensional para el año 2017 de \$4.221.851, esto es, mayor a la reconocida por Colpensiones para dicha anualidad, que lo fue de \$3.518.210.

En cuanto a la excepción de prescripción, señala la apoderada de la actora al recurrir la decisión, que debe tenerse en cuenta la reclamación presentada el 11 de diciembre de 2020, por medio de la cual solicitó la reliquidación de la mesada pensional de su representada, manifestación que no comparte esta Sala de Decisión Laboral, en tanto que conforme lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, la prescripción se interrumpe solo por una vez y la actora, solicitó a Colpensiones la reliquidación de la pensión desde el 4 de noviembre de 2015, al interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución GNR 318917 del 16 de octubre de 2015, de ahí que, la nueva solicitud que como se afirma en los hechos de la demanda fue presentada el 11 de diciembre de 2020, no interrumpe la prescripción, por lo que debe tenerse presente la fecha de radicación de la demanda, verificando que el libelo introductorio se radicó por los medios virtuales el 30 de marzo de 2022, resultando acertada la determinación de la funcionaria de primer grado, de declarar probada la excepción de prescripción, en relación a los reajuste causados con anterioridad al 30 de marzo de 2019.

En cuanto al retroactivo pensional generado en favor de la actora, se tiene que el Juzgado lo liquidó en la suma de \$26.484.107 y realizadas las operaciones aritméticas por parte de esta Magistratura, se advierte que el retroactivo generado por los reajuste de las mesadas pensionales entre el 30 de marzo de 2019 y el 31 de julio de 2022, asciende a la suma de \$34.009.377, suma superior a la ordenada por la a quo, sin que sea posible determinar el motivo de diferencia, en tanto que no fue aportada la liquidación, precisando que toda vez que la parte actora, no formuló reparo en relación a la suma liquidada por el Juzgado, no es posible modificar la misma.

Se indica finalmente en este punto, que el valor de la mesada pensional que deberá continuar reconociendo Colpensiones a la gestora del proceso a partir del 1° de agosto del año en curso, es de \$5.051.117, tal y como fue señalado en la sentencia apelada, encontrándose igualmente ajustada a derecho la

autorización dada a Colpensiones, a efectos que realice los descuentos en salud respecto de los montos a reconocer a la actora, por concepto de reliquidación de la pensión de vejez.

De los intereses moratorios

Bajo la égida de la consulta, se advierte que son procedentes los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto en el sub lite, no se presenta ninguna de las situaciones que exoneran a la entidad de su reconocimiento, de acuerdo con el precedente contenido en la sentencias SL SL 4174 de 2019, pues si bien el derecho al reajuste pensional surge del cambio de posición jurisprudencial en torno a la posibilidad de sumatoria de tiempos públicos y privados bajo los lineamientos del Decreto 758 de 1990, la segunda reclamación de la demandante se radicó el 11 de diciembre de 2020, esto es, con posterioridad a las sentencias CSJ SL1947-2020 y CSJ SL1981-2020 del 01 de julio de 2020 y SL 2557 (72425) del 08 de julio de 2020, que adoptan la nueva postura.

Sin costas en esta instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, dentro del proceso ordinario

laboral instaurado por la señora MARÍA PATRICIA SOTO VÉLEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

2.- Sin costas en esta instancia.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA
Se suscribe con firma electrónica por salubridad pública
(Art. 11 Deceto 491 de 2020)


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado